

Experto en educación: «La escuela no es el Registro Civil ni control migratorio»

El sociólogo Francisco Alvear advirtió que la propuesta del Gobierno para que colegios entreguen antecedentes de familias migrantes podría aumentar la deserción escolar y empujar a niños fuera del sistema educativo. Además cuestionó que el Estado siga cargando a las escuelas problemas sociales que —a su juicio— deberían resolverse desde otras instituciones.



Sociólogo FRANCISCO ALVEAR

Por Joaquín López Barraza

■ **«PUEDE GENERAR EXACTAMENTE EL EFECTO CONTRARIO»**

La idea impulsada por el Gobierno de que establecimientos educacionales entreguen antecedentes de familias migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones sigue generando críticas en el mundo educativo. Mientras La Monea insiste en que la medida busca «ordenar» el sistema migratorio, expertos advierten que podría terminar provocando efectos mucho más complejos dentro de escuelas y barrios.

Uno de ellos es Francisco Alvear, sociólogo y director de Socio Educativo, quien cuestionó duramente la propuesta y aseguró que el Estado está intentando trasladar funciones de control migratorio a instituciones que tienen otro objetivo. «La escuela no es el Registro Civil ni control migratorio», afirmó.

El debate surgió luego que se conociera la propuesta presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para que organismos de Salud y Educación entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones. Aunque desde el Gobierno posteriormente aclararon que no se trataría de una «obligación de denuncia», la discusión ya abrió fuertes reparos desde sectores ligados a educación, salud y derechos de la infancia.

Para Alvear, el principal problema es que la medida podría terminar alejando justamente a niños y familias del sistema escolar.

«Pedir información a las familias migrantes en colegios lo único que va a hacer es desincentivar que esos niños vayan al colegio», sostuvo. Y advierte una consecuencia todavía más delicada.

«Mayor deserción escolar significa mayores posibilidades de que esos niños terminen siendo captados por organizaciones criminales».

Ahí aparece uno de los puntos centrales de su análisis: la escuela no solo cumple una función educativa, sino también de protección social, especialmente en sectores vulnerables.

«Los establecimientos educacionales son espacios donde los niños realmente están resguardados», señaló.

Según explica, sacar menores del sistema educativo implica devolverlos a contextos donde aumentan riesgos de violencia, exclusión, vulneración de derechos y captación por bandas delictivas.

«Entre menos participen del sistema educativo, mayores posibilidades existen de ingresar a grupos delictuales u otros riesgos que afectan a

«LA MIGRACIÓN VA A SEGUIR EXISTIENDO»

Hacia el final de la entrevista, el experto sostuvo que el fenómeno migratorio no desaparecerá y que el verdadero desafío del Estado pasa por construir mecanismos de integración y convivencia social. «La migración va a seguir existiendo. Es un fenómeno que ha acompañado todas las etapas de la historia humana».

Y cerró insistiendo en que los principales afectados por este tipo de debates terminan siendo niños y adolescentes que no tomaron decisiones sobre cómo llegaron al país.

«Los niños migrantes no son responsables de las decisiones políticas ni de las crisis migratorias. Son personas buscando un espacio donde desarrollar su vida de manera tranquila», concluyó.

las infancias», afirmó.

Durante la conversación, el especialista también abordó la creciente cantidad de responsabilidades que hoy recaen sobre las escuelas chilenas. Consultado sobre si al sistema educativo se le está exigiendo demasiado —desde convivencia y salud mental hasta alimentación e integración cultural— Alvear sostuvo que efectivamente los establecimientos terminan absorbiendo problemas sociales que muchas veces exceden lo pedagógico.

«Las escuelas son reflejo de la situación de la sociedad. La violencia muchas ve-

ces viene desde afuera y emerge dentro del establecimiento», afirmó.

Y agregó que trasladar además funciones ligadas al control migratorio profundiza todavía más esa presión sobre profesores, asistentes y directivos. «El diseño que tienen los establecimientos educacionales está orientado a educar, no son centros migratorios, Registro Civil o Investigaciones».

■ **«EL ESTADO ESTÁ SIENDO IRRESPONSABLE»**

Otro de los puntos más

duros de la entrevista apuntó directamente al propio Estado. «El Estado en esta materia está siendo irresponsable», afirmó.

A juicio de Alvear, Chile ya posee obligaciones legales respecto a protección de datos, derechos del niño, igualdad ante la ley y acceso universal a la educación, por lo que considera riesgoso trasladar funciones de fiscalización migratoria a las escuelas.

«Generar este tipo de acciones va en contra de compromisos legales que el propio país ha adquirido durante décadas». El sociólogo aclaró que eso no significa desconocer la existencia de una crisis migratoria ni negar la necesidad de regulación.

«Lo que tiene que hacer el Estado es fortalecer Migraciones y los organismos encargados de regular estos procesos». Pero insiste en que el enfoque escogido es equivocado. «Estamos atacando un síntoma y no la enfermedad».

EL EFECTO SOCIAL DEL DEBATE MIGRATORIO

Durante la conversación también apareció el impacto que este tipo de discusiones puede generar dentro de las propias comunidades escolares.

Alvear evitó vincular directamente migración con violencia escolar o delincuencia, señalando que no existen antecedentes públicos que permitan sostener aquello. Sin embargo, sí advirtió que el discurso político influye directamente en cómo se relacionan estudiantes, familias y comunidades.

«La comunicación política y los eslóganes generan efectos en las subjetividades de las personas», afirmó.

Y advierte que incluso aunque medidas como esta no lleguen a aplicarse completamente, el daño social puede quedar instalado igual. «El efecto comunicacional ya está dado».